

El proyecto de real decreto da cumplimiento o desarrolla lo dispuesto en el art. 84 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, que atribuye a las Administraciones educativas la competencia de regular el proceso de admisión de alumnos y alumnas en centros públicos y privados concertados, garantizando el derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad y la libertad de elección de centro por padres, madres o tutores legales, de acuerdo con la regulación establecida en el capítulo III, escolarización en centros públicos y privados concertados, de su título II, equidad en la educación.

Dicho precepto tiene el siguiente contenido:

*Artículo 84. Admisión de alumnos.*

*1. Las Administraciones educativas regularán la admisión de alumnos y alumnas en centros públicos y privados concertados de tal forma que garantice el derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad y la libertad de elección de centro por padres, madres o tutores legales. En dicha regulación se dispondrán las medidas necesarias para evitar la segregación del alumnado por motivos socioeconómicos o de otra naturaleza. En todo caso, se atenderá a una adecuada y equilibrada distribución entre los centros escolares del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.*

*2. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados 6 y 7 de este artículo, **cuando no existan plazas suficientes** el proceso de admisión se regirá por los **criterios prioritarios** de existencia de hermanos o hermanas matriculados en el centro; proximidad del domicilio o del lugar de trabajo de alguno de sus padres, madres o tutores legales y la renta per cápita de la unidad familiar. Asimismo, se tendrá en cuenta que los padres, madres o tutores legales trabajen en el centro, la **condición legal de familia numerosa, de alumnado nacido de parto múltiple, de familia monoparental, la situación de acogimiento familiar del alumno o alumna, la concurrencia de discapacidad** en el alumno o alumna o en alguno de sus padres, madres o hermanos y hermanas **y la condición de víctima de violencia de género o de terrorismo**. Ninguno de estos criterios tendrá carácter excluyente ni podrá suponer más del 30 % del total de la puntuación máxima, salvo la proximidad al domicilio que podrá superar ese límite.*

3. *En ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, opinión, discapacidad, edad, enfermedad, orientación sexual o identidad de género o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.*

4. *Las Administraciones educativas podrán solicitar la colaboración de otras instancias administrativas para garantizar la autenticidad de los datos que los interesados y los centros aporten en el proceso de admisión del alumnado.*

5. ***Corresponde a las Administraciones educativas establecer el procedimiento y las condiciones para la adscripción de centros públicos, respetando la posibilidad de libre elección de centro.*** Los centros públicos adscritos a otros centros públicos que impartan etapas diferentes se considerarán centros únicos a efectos de aplicación de los criterios de admisión del alumnado establecidos en la presente Ley. Asimismo, en los centros públicos que ofrezcan varias etapas educativas el procedimiento inicial de admisión se realizará al comienzo de la que corresponda a la menor edad.

6. *En los **procedimientos de admisión de alumnos y alumnas** en centros públicos que impartan educación primaria, educación secundaria obligatoria o bachillerato, cuando no existan plazas suficientes, tendrán prioridad quienes procedan de los centros de educación infantil, educación primaria o educación secundaria obligatoria, respectivamente, que tengan adscritos. En el caso de los centros privados concertados se seguirá un procedimiento análogo, siempre que dichas enseñanzas estén concertadas.*

7. Asimismo, tendrán **preferencia** en el área o zona de escolarización que corresponda al domicilio o al lugar de trabajo, indistintamente, de alguno de sus padres, madres o tutores legales aquellos alumnos y alumnas cuya escolarización en centros públicos o privados concertados venga motivada por traslado de la unidad familiar debido a la movilidad forzosa de cualquiera de los padres, madres o tutores legales, una discapacidad sobrevenida de cualquiera de los miembros de la familia o a un cambio de residencia derivado de actos de violencia de género.

8. *En los centros privados concertados, que impartan varias etapas educativas, el procedimiento inicial de admisión se realizará al comienzo de la oferta del curso que sea objeto de concierto y que corresponda a la menor edad. Este procedimiento se realizará de acuerdo con lo establecido para los centros públicos.*

9. La matriculación de un alumno en un centro público o privado concertado supondrá respetar su proyecto educativo, sin perjuicio de los derechos reconocidos a los alumnos y a sus familias en las leyes y lo establecido en el apartado 3 de este artículo.

10. La **información de carácter tributario que se precisa para la acreditación de las condiciones económicas a las que se refieren el artículo 84.2 de esta Ley, será suministrada directamente a la Administración educativa por la Agencia Estatal de Administración Tributaria** y por los órganos competentes de la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra, a través de medios informáticos o telemáticos, en el marco de colaboración que se establezca en los términos y con los requisitos a que se refiere la disposición adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias, y las disposiciones que las desarrollan.

11. En la medida en que a través del indicado marco de colaboración se pueda disponer de dicha información, no se exigirá a los interesados que aporten individualmente certificaciones expedidas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por los órganos mencionados en el apartado anterior, ni la presentación, en original, copia o certificación, de sus declaraciones tributarias. En estos supuestos, el certificado será sustituido por **declaración responsable del interesado de que cumple las obligaciones señaladas, así como autorización expresa del mismo para que la Agencia Estatal de Administración Tributaria o los órganos competentes de la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra, suministren la información a la Administración educativa.**

Se observa por lo tanto en la ley una regulación relativamente completa del procedimiento de admisión de alumnos en centros sostenidos con fondos públicos, y de los criterios de admisión o preferencia en los casos en que hay más demanda de oferta que plazas en un centro concreto. La determinación de esas preferencias surge de la aportación por los requirentes de plazas de la información necesaria, que constituyen datos personales, que permiten en el curso del procedimiento de admisión la determinación del orden concreto.

El Proyecto de Real Decreto sometido a informe contiene una referencia en su art. 10 a la normativa de protección de datos, y a su vez una remisión a una Disposición Adicional Única que regula de manera completa y pormenorizada la materia, y que esta Agencia valora muy positivamente.

A su vez, el expediente se completa con la Memoria de Análisis Normativo (MAIN), que dedica, dentro del apartado de análisis de impactos del proyecto, junto a otros (impacto medioambiental, en materia de igualdad de

oportunidades) el impacto en el derecho fundamental a la protección de datos personales.

Además, la MAIN contiene un **Anexo** con la Evaluación de Impacto para la protección de datos, que es completo y analiza la cuestión desde la perspectiva del juicio de proporcionalidad. Examina la existencia de tratamientos de datos personales en el procedimiento regulado, la finalidad del tratamiento, su base legitimadora (art. 6.1. c) y e) RGPD), quienes son los interesados o afectados en los tratamientos y las categorías de datos solicitados, así como el plazo de conservación. También el responsable del tratamiento, y la evaluación de su idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Y, por último, lo que de manera similar se considera muy favorablemente, se incorpora al Anexo la “ficha” del Registro de Actividades del Tratamiento con la información esencial (amplia) de este.

Esta Agencia viene recomendando repetidamente en sus informes que el prelegislador, en aquellos casos, como el presente, en que los tratamientos tienen como base jurídica el art. 6.1.c) o e) del RGPD (esto es, tratamientos cuya base es una obligación legal o una misión de interés público), y venga establecida por el Derecho de la Unión o el Derecho del Estado miembro que se aplique al responsable del tratamiento y tal Derecho regule la operación específica de tratamiento o conjunto de operaciones en cuestión, como es el caso de las operaciones de tratamiento que derivan del proyecto que se informa, haga uso de la posibilidad que establece el art. 35.10 RGPD de modo que sea el propio órgano proponente de la disposición general, en el curso del procedimiento de creación de la disposición de la norma (ley, real decreto etc.) quien realice un análisis de riesgos y en su caso una evaluación de impacto relativa a la protección de datos (EIPD) como parte de una evaluación de impacto general en el contexto de la adopción de dicha base jurídica (esto es, que analice en la MAIN los impactos en materia de protección de datos junto con el resto de impactos a que normalmente se refiere la MAIN: por razón de género, en las familias etc.).

En esta ocasión, y de manera muy acertada, el prelegislador ha realizado dicho análisis, ha recogido, de manera amplia y extensa, sus resultados en la MAIN y plasmado estos resultados en una disposición específica (en este caso en una Disposición Adicional, DA) las cuestiones necesarias relacionadas con los tratamientos de datos personales necesarios para llevar a cabo el objetivo del Real Decreto, que es el desarrollo del procedimiento de admisión de alumnos en el ámbito de Ceuta y Melilla en desarrollo del art. 84 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

El análisis del Anexo y de la MAIN se ha plasmado en la regulación que se contiene en la Disposición Adicional Única (DA). Entando ahora en el contenido específico de la DA, esta Agencia sugiere que, sin perjuicio de la

opinión muy favorable que le merece, y que ya se ha expresado, la misma se acompase, en cuanto al contenido, de la manera más fiel posible al cuadro que aparece en la MAIN (que recoge el contenido del Inventario -o Registro de Actividades de Tratamiento (RAT), y que contiene todas las características de los tratamientos, con los comentarios que se añaden.

En el apartado 1 de la DA, los derechos de que gozan los interesados en el RGPD son más amplios que los de “acceso, rectificación y supresión”. Se incluyen los de limitación del tratamiento (art. 18), la obligación de notificación relativa a la rectificación o supresión de datos personales o la limitación del tratamiento (art. 19) y el derecho de oposición (art. 21) o derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas o de elaboración de perfiles (art. 22). Estos derechos, según el caso, pueden ejercerse por los interesados también en casos en que la base jurídica sea el art. 6.1.e) RGPD, por lo que se considera que al igual que en el proyecto se mencionan los derechos de acceso, rectificación y supresión, los demás no deben de silenciarse, pues tienen la misma categoría y entidad que los primeros.

En el apartado 2 de la DA se expresa que

*Son datos de carácter personal objeto de tratamiento, todos aquellos que resulten **imprescindibles** para el desarrollo y ejecución de las actuaciones y procedimientos que se articulan en este real decreto, en garantía del desarrollo del proceso de admisión en los centros educativos sostenidos con fondos públicos de las ciudades de Ceuta y Melilla. En **particular** son objeto de tratamiento datos identificativos, personales, académicos, económicos y otros datos necesarios de los integrantes de la unidad familiar.*

Esta AEPD considera que esta expresión debería de concretarse aun más en la determinación concreta y específica de qué datos personales han de ser objeto de tratamiento. No se considera óptimo una expresión que no determina de manera concreta los datos personales que serán objeto del tratamiento. Los interesados, con la forma de expresión utilizada, no conocen de manera específica, sino sólo aproximada, cuáles de sus datos personales van a ser tratados para las finalidades del tratamiento. El análisis ha de llegar hasta la determinación, y plasmación, de los datos personales que va a ser objeto del tratamiento, y no mediante una expresión genérica como la utilizada. Mucho mas en una norma de rango menor (en materia de protección de datos) como un Real Decreto.

En cuanto a la finalidad del tratamiento, se considera más acertada la que se plasma e el Anexo de la MAIN (en el RAT).

En cuanto a la base jurídica del tratamiento, en el apartado 5 de la DA se menciona el “interés público esencial”, que no está recogido como base jurídica en el art. 6 RGPD, sino como causa de levantamiento de la prohibición del

tratamiento de las categorías especiales de datos (art. 9 RGPD). Esa mención, en ese punto, al interés “esencial” no sería correcta. Sí lo es, por supuesto, la mención al art. 6.1, apartados c) y e) RGPD.

En cuanto a la causa de levantamiento de la prohibición del art. 9.2.g) RGPD para el tratamiento de datos sensibles (o categorías especiales de datos personales del art. 9 RGPD), hay que mencionar en primer lugar que en el RAT (Anexo de la MAIN) no se menciona esta causa, por lo que debería de completarse el RAT con esta mención y análisis. Por lo que hace a su mención en la DA (apartado 5, in fine), no expone la norma cuál es ese interés esencial (sería conveniente su mención al menos), pero además el art. 9.2.g) RGPD requiere que el Derecho del Estado miembro que autorice dichos tratamientos de datos especiales *proporcional al objetivo perseguido, respetar en lo esencial el derecho a la protección de datos y establecer medidas adecuadas y específicas para proteger los intereses y derechos fundamentales del interesado*; no se establece cuáles son esas “medidas adecuadas y específicas” que protegen los derechos del interesado cuyos datos de categorías especiales se van a tratar.

En cuanto al plazo de conservación, del año, (como máximo) se observa favorablemente.

En cualquier caso, y sin perjuicio de las sugerencias y comentarios que se realizan en este Informe, esta AEPD reitera su opinión muy favorable al análisis realizado por el prelegislador, en la materia de protección de datos en el proyecto.